



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA Y CONSTITUCIONAL

Yerson Stid Medina Quijano*

Universidad Católica de Colombia

Resumen

En este artículo de investigación recoge un análisis a profundidad del aborto desde la perspectiva constitucional por medio del análisis jurisprudencial y desde el derecho comparado donde el objetivo será revisar varios sistemas jurídicos que han llegado a la decisión por vía judicial de despenalizar el aborto. Para el desarrollo del tema se contextualizará al lector dentro de los conceptos propios de la temática a tratar para posteriormente ahondar en el derecho constitucional aplicable en nuestro país y seguir con el análisis de derecho comparado, en países de América, Europa y Asia que son aquellas que más se asemejan al contexto social y político de nuestro país haciendo la comparación de la situación jurídica de éstos con la posición sostenida por la Corte Constitucional colombiana. El artículo expone un ejercicio de análisis comparado considerando los países que han favorecido la despenalización del aborto como consecuencia de considerar primordialmente los derechos de las mujeres y como un escenario planteado por otros sistemas jurídicos y posible modelo para Colombia.

Palabras Clave: Aborto; Despenalización; Derecho Comparado; Madre gestante; Nasciturus; Jurisprudencia Constitucional; Protección de derechos; Colombia.

* Artículo de Reflexión elaborado como Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado, bajo la Dirección de la Dra. Tania Giovanna Vivas Barrera, Docente - Investigadora de la Facultad de Derecho. Correo Institucional: ysmolina94@ucatolica.edu.co. Código: 2110694. Los argumentos expuestos y desarrollados en el trabajo de grado a favor del aborto corresponden a la posición exclusiva del estudiante y no concuerdan con la posición personal de la Directora

DEPENALIZATION OF ABORTION IN COLOMBIA FROM A COMPARATIVE AND CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE

Abstract

This research article will present an in-depth analysis of abortion from two perspectives. First, from the Constitutional through jurisprudential analysis and from comparative law where the objective will be to argue legally if the total decriminalization of abortion in Colombia is possible. For the development of the topic, the reader will be contextualized within the concepts of the subject to be treated and then delve into the constitutional law applicable in our country and continue with the analysis of comparative law, that is, referring to foreign legislation in countries of America , Europe and Asia, which are those that most resemble the social and political context of our country, comparing their legal situation with respect to ours, in order to demonstrate with quite solid arguments that it is possible to totally decriminalize the abortion in Colombia. Through the aforementioned analysis, it is concluded that when legal and jurisprudential development is well-known according to social progress and in the current context, it is possible to regulate such a complicated issue as abortion, is also important to add that abortion in Colombia can be completely decriminalized if a thorough examination of our current realities is carried out, carrying out the same exercise that the countries that will be studied in this article practiced, taking into account that they primarily ensure the effective fulfillment of the rights enshrined in their Political Charter making a correct interpretation of these.

Keywords: Abortion; Decriminalization; Comparative Law; Pregnant mother; Nasciturus; Constitutional Jurisprudence; Protection of rights; Colombia.

Sumario

Introducción. 1. Definición y clasificación del aborto. 2. Contextualización del aborto en Colombia. 3. Tipificación del aborto en Colombia. 4. Marco constitucional para la protección de los derechos de las madres gestantes en Colombia. 4.1. Derecho a la vida. 4.2. Derecho a la salud. 4.3. Derecho a la autonomía sexual y reproductiva. 4.4. Derecho a la integridad y dignidad humana. 4.5. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 5. Sentencia C-355 DE 2006. 6. Derecho Comparado. 6.1. Países que se aceptan la legalización del aborto. 6.1.1. Canadá. 6.1.2. Estados Unidos. 6.1.3. Uruguay. 6.1.4. España. 6.1.5. Italia. 6.1.6. India. 6.2. Países que rechazan la legalización del aborto. 6.2.1. Nicaragua. 6.2.2. República Dominicana. 6.2.3. Honduras. Conclusiones. Referencias.

Introducción

En una cultura como la colombiana, con raíces católicas y con conceptos morales tan conservadores, de familias grandes y mentes cerradas a nuevos cambios, es complicado hablar de temas tan polémicos como lo es la homosexualidad, la eutanasia, la manipulación genética, la religión, la política y aún más el tema que se aborda en esta investigación, es decir el aborto. Hasta antes del año 2006, en la legislación colombiana estaba totalmente prohibida la interrupción voluntaria del embarazo, es decir que no se permitía realizar tal procedimiento en ninguna circunstancia. Debido a esto se vulneraban derechos tan importantes como la vida, la salud y la autonomía sexual y reproductiva que efectivamente son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. A partir del 10 de Mayo de 2006 esta situación cambió, la Corte Constitucional colombiana estipuló en la sentencia C-355 de 2006 los casos en que específica y taxativamente la ley colombiana permite el aborto, esto fue un duro golpe para quienes están totalmente en contra de este procedimiento, principalmente para la iglesia católica, la cual lógicamente se tenía que pronunciar al respecto, estando totalmente en desacuerdo con este fallo; fue un cambio en el pensamiento del colombiano promedio, aunque no se despenalizó totalmente, hubo un cambio radical en cuanto a la concepción que las personas tenían a cerca de este “tabú” ya que se consideraba más como un delito con una pena específica, tanto legal como moral y no como la ratificación y ejercicio de sus derechos.

A partir de esto, en esta investigación se realizará un análisis de las decisiones de la Corte Constitucional con respecto a los derechos que se les deberían proteger a las mujeres gestantes que no quieren por cualquier razón ser madres. Se realizará un paralelo con las legislaciones de varios países del mundo, donde el aborto no está penalizado y han sido países donde se respetan derechos constitucionales y se brindan garantías para la protección de las mujeres que por voluntad propia deciden interrumpir su embarazo.

Cabe resaltar, que el presente estudio estará guiado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el derecho comparado con el fin de dar respuesta al interrogante ¿Se debería despenalizar totalmente el aborto en Colombia?, abarcando las diferentes problemáticas que se presentan a nivel social, económico y cultural.

Siguiendo la línea de la temática a tratar, el objetivo general será demostrar y argumentar jurídicamente la manera en que se puede lograr la despenalización total de aborto en Colombia por medio del análisis jurisprudencial de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional colombiana y el derecho comparado en América, Europa y Asia.

Así pues, con el ánimo de responder la pregunta objeto de esta investigación, se presentará primero a manera de introducción, la definición y clasificación del concepto de aborto con el fin de ubicar al lector dentro del tema, después se realizará la contextualización del tema con el ánimo de exponer al lector la realidad social, económica y cultural en la cual se desarrolla el aborto en Colombia, posteriormente nos remitiremos en materia penal a la tipificación del delito de aborto dentro del contexto legal colombiano, para por otro lado ahondar en el marco constitucional para la protección de las madres gestantes en Colombia, abordando sentencias para explicar los temas relacionados con los derechos a la vida, salud, autonomía sexual y reproductiva, integridad y dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Además, se estudiará a profundidad la sentencia C-355 de 2006 la cual fue la que impuso los requisitos para el aborto en el país. Finalmente, después del estudio jurisprudencial, entraremos de lleno en el derecho comparado, analizando legislaciones de países como Canadá, Estado Unidos, Uruguay, España, Italia e India.

1. Definición y Clasificación del Aborto

El concepto de aborto puede llegar a ser diferente para cada persona dependiendo de sus creencias, su educación y otras muchas variables. Con el ánimo de ubicar temáticamente al lector

dentro del tema del aborto y unificar conceptos, se expondrá a continuación cual es origen y significado de esta palabra:

La palabra aborto proviene del latín “abortus” o “aborsus”, que a su vez deriva del término “aborior”. Este concepto se utilizaba para referir lo contrario a “orior”, o sea, lo contrario a nacer. El aborto es la interrupción del desarrollo del embrión o el feto durante el embarazo. La Real Academia Española (22ª edición) define aborto como la “interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas”. (OMS, 1997 y 2003). (Johnson, N, López, G. A, & Sapriza, G. (2011) p. 19).

Ahora que el concepto está claro y unificado, se puede continuar con el desarrollo de la temática, explicando o puntualizando la clasificación existente del aborto, dentro de la cual se mencionan el aborto espontáneo, inducido y voluntario, esto con el fin de definir a un más los límites de la investigación y así como lo hicimos con el significado, unificar conceptos:

Como lo menciona Johnson, N, López, G. A, & Sapriza, G. (2011), el aborto puede clasificarse en dos tipos espontáneo e inducido.

El aborto espontáneo se presenta cuando un embrión o el feto se pierden por causas naturales y sin que medie la voluntad de eliminar al Nasciturus por parte de la mujer o por parte del médico. Son aquellas que se producen en ausencia de maniobras facilitadoras, es decir sin la intervención de circunstancias que interfieran artificialmente en la evolución de la gestación.

Dentro de la segunda categoría, se incluye el aborto voluntario. El aborto inducido es el que surge como resultante de maniobras practicadas con la intención de interrumpir el embarazo. (Johnson, N, López, G. A, & Sapriza, G, 2011, p. 20).

2. Contextualización del Aborto en Colombia:

En la realización del ejercicio investigativo, se decidió tratar las temáticas más profundas que afectan a las mujeres gestantes dentro de la realidad y contexto social colombiano desde el punto de vista socioeconómico, también desde los derechos humanos y por último desde la problemática de salud pública.

Para abordar la temática de investigación desde una mirada socioeconómica se debe iniciar resaltando que este factor es uno de los más importantes debido a la relevancia que toma la posición social, de allí se deriva que los menos favorecidos sean los que menor educación sexual tienen, por ende son aquellos los más vulnerables al momento de tomar la decisión de abortar al no conocer los riesgos y en algunas ocasiones tomar este procedimiento como método de planificación derivándose de allí graves consecuencias para las mujeres gestantes.

Debido a esto, las mujeres que tienen el deseo de abortar, independientemente de la razón, se ven obligadas a someterse a procedimientos clandestinos que elevan el riesgo de enfermedad o muerte ya que el Estado no vela por sus derechos individuales, estas situaciones se presentan graves violaciones a principios y derechos constitucionales como lo son la principalmente la vida, la salud en conexidad con la vida y a la igualdad, ya que estas mujeres no pueden someterse a una intervención profesional y segura

Con el fin de abordar el tema de salud pública es necesario contextualizar la realidad social y relacionarla con el nivel socioeconómico de las madres gestantes. Está claro que los abortos ilegales o también llamados clandestinos son una problemática de salud pública nacional de tal magnitud que “son la tercera causa de mortalidad materna según el Ministerio de Protección Social” (U. Nacional, 2007, p.21). Estas víctimas, debido a sus condiciones socioeconómicas, aquellas que fueron desarrolladas anteriormente en este artículo, recurren a procedimientos carentes de profesionalismo, en condiciones precarias y algunas veces a procedimientos caseros en donde aumenta el riesgo de poner en peligro la vida de las mujeres gestantes que quieren realizar la interrupción del embarazo. Los factores principales para que las mujeres en estado de embarazo recurran al aborto, son abundantes, entre ellos podemos encontrar, como ya hemos mencionado, la situación socioeconómica la cual es una de las causales más influyentes, también la presión psicológica ejercida por su pareja o allegados y la negativa o falta de apoyo por parte de estos, llegando a convertirse en un problema para las mujeres gestantes. Aunado a esto está cuando el aborto se presenta en adolescentes o menores de edad, en estos casos la presión psicológica aumenta y la mujer al momento de verse en una situación tan comprometedor y con la responsabilidad tal de velar por la vida de alguien más, en lo primero que piensa es en recurrir a un procedimiento rápido, económico y por ende clandestino.

3. Tipificación del aborto en Colombia

Dentro del derecho penal colombiano se tipifica como delito el aborto, cumpliendo con los elementos objetivos del tipo estando permitida su aplicación con algunas excepciones taxativas las cuales fueron declaradas por la Corte Constitucional, el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, tipifica el aborto así:

Artículo 122. Aborto: La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. (Código Penal Colombiano, 2019).

Con base en este artículo se puede observar cómo el legislador trata a toda mujer que interrumpe su embarazo como el sujeto activo de la conducta punible, sin tener en cuenta aspectos con tanta relevancia como lo son el modo de concepción o la salud y vida de la madre afectando su dignidad y autonomía. Analizando esta situación es a todas luces una carga desproporcionada ya que no garantiza los derechos de la madre gestante consagrados en la Constitución y en el Bloque de Constitucionalidad.

Se deduce también, que, si una mujer por cualquier razón decide abortar a su hijo, incurre en un delito tipificado en el Código Penal Colombiano y como consecuencia se daría la imposición de una pena que se traduce en prisión y/o multa. Este artículo fue el que reguló la Corte Constitucional cuando el 10 de mayo de 2006 declaró exequible condicionado este artículo por medio de la sentencia C-355 de 2006 la cual señala los casos en que está permitido la interrupción voluntaria del embarazo.

4. Marco constitucional para la protección de los derechos de las madres gestantes en Colombia.

Dentro de los problemas jurídicos que se presentan en el derecho es obligatoria la verificación del marco constitucional de los diferentes temas a tratar, con el objetivo de conocer la protección y regulación existente en el derecho internacional y en el nacional, proporcionando al lector los medios eficaces para discernir dando a conocer a profundidad los derechos humanos o fundamentales que se pueden transgredir en el caso de que se transgredan.

4.1. Derecho a la vida.

En la presente investigación se estudiará el derecho a la vida con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para exponer los argumentos a favor de la despenalización del aborto en Colombia.

En primera medida tenemos que remitirnos a la legislación internacional, en este caso en particular a la Declaración Universal de los Derechos Humanos celebrada en 1948, la cual en su artículo 3 menciona que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Esto da a entender que desde el derecho internacional la vida está protegida en todas las formas, que debe primar tanto el respeto por esta como también la protección de la misma y que es el derecho más importante que tiene una persona.

Ahora, nos remitiremos a la Constitución Política colombiana la cual en su artículo 11 señala que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Este señalamiento es muy concreto pero tiene un trasfondo amplio e importante ya que el Estado Colombiano protege el derecho fundamental a la vida desde la perspectiva constitucional, reconociendo su primacía e importancia para la regulación de las relaciones dentro del contexto social.

Como complemento de las anteriores normas y relacionando esto con el tema en discusión, se expone el concepto presentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 en la cual desde el punto de vista de la defensa de la vida de la madre dice lo siguiente:

El derecho a la vida, a la salud, a la integridad, deben ser analizados por separado para encontrar las posibles incompatibilidades de la norma demandada con los derechos fundamentales constitucionales amparados. Es evidente, que en circunstancias de aborto como el peligro inminente para la vida de la madre, la ley no puede despersonalizar a la mujer hasta el punto de considerar que es necesario conservar la vida del nasciturus en perjuicio de otra, pues no es menos que decretar de oficio la pena de muerte para la mujer en estado de embarazo. Una legislación que no permita despenalizar el aborto en esta circunstancia es claramente violatoria del derecho fundamental a la vida.

La prohibición de aborto cuando este configura peligro inminente para la vida de la madre se traduce en una contradicción lógica que no puede tener acogida en el ordenamiento constitucional colombiano. La madre que está en estado de embarazo no tiene ninguna opción de actuar respetando la ley – no incurriendo en la conducta típica de aborto – mientras preserva su vida pues si respeta el dicho de la ley se condena a morir y a abandonar al niño a su suerte y si no lo hace debe someterse a un aborto en condiciones insalubres y denigrantes que si no le cuesta la vida si la condena a la cárcel. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

Desde esta postura la Corte señala que la mujer no debe ser obligada a recibir la “pena de muerte” por existir dentro de la normatividad una prohibición de abortar, sino que debe ser protegido su derecho a la vida como principio constitucional y derecho fundamental, además, trata el problema de salud pública y realidad socioeconómica que viven las mujeres gestantes que tienen el deseo de abortar, al sopesar la comisión de un ilícito con la protección de la vida y al inferir que este último es el que debe prevalecer.

4.2. Derecho a la salud.

Así pues, abordaremos el derecho a la salud como complemento o en conexidad con el derecho a la vida, de tal forma que dentro de los argumentos analizados quede claramente expuesto el concepto y el alcance de este derecho.

Un primer concepto lo presenta la Organización Mundial de la Salud (2001), la cual ha entendido el concepto de Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia”, dando a entender que no se habla solamente de salud física que es aquella en específico en la que piensa una persona común, sino que también se deben tener en cuenta todos los demás aspectos que la conforman.

Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 25).

Allí se resalta el bienestar general de las personas y mencionando el derecho a la salud partiendo de una premisa general de la protección de derechos

Teniendo en cuenta el problema jurídico objeto de estudio, la Corte Constitucional (2006) “ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el derecho a la salud protegido por la Constitución Política es integral”, es decir que abarca otros aspectos que conforman el termino salud y no se refiere sólo a la salud física.

En este sentido la Corte indica:

Se ha señalado que la persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y psíquico. Su vida, para corresponder verdaderamente a la dignidad humana, exige la confluencia de todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo.

Por otra parte, el artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico.

Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por acción o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

De acuerdo a esto, menciona la Corte que no solo salvaguarda físicamente lo referente salud de las personas, sino que además de esto protege los elementos intrínsecos del bienestar psicológico, mental y psicosomático de las personas y recalca que:

Las entidades públicas o privadas encargadas de prestar los servicios de salud no pueden excluir de su cobertura los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental

y psicológica de sus afiliados o beneficiarios en ninguna de las fases o etapas de evolución de una determinada patología, protegiendo de esta manera los derechos de las madres gestantes y reconociendo así sus derechos. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

4.3. Derecho a la autonomía sexual y reproductiva.

Actuando como conjunto en aras de velar por la protección de la vida, la salud y la autonomía sexual y reproductiva trabajan juntos para el reconocimiento de los derechos fundamentales a las madres gestantes que no tienen el deseo de continuar con su embarazo. En cuanto a este último es claro que el ejercicio de este derecho dentro de la autonomía de la mujer no puede ser transgredido y se debe dejar a su libre arbitrio la decisión de abortar en cualquier circunstancia.

La Corte afirma que:

Dentro del ámbito de protección de la autonomía en materia de salud se incluyen distintos derechos de profunda relevancia para el caso objeto de estudio, entre los que cabe destacar el derecho a planear la propia familia, el derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas y el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la salud sexual y reproductiva. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

Esta Corporación, vela por la protección de los derechos que afecten la salud sexual y reproductiva dentro del contexto actual, dando pautas valiosas para la protección de los derechos de las mujeres en estado de gestación que tienen el deseo de abortar.

Para la Corte la relevancia que adquiere este derecho es de especial tratamiento y preservación, razón por la cual dentro de la argumentación jurídica traída a colación asevera lo siguiente:

Cabe recordar nuevamente, que el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la salud sexual y reproductiva, por su parte, tiene una clara perspectiva de género y se desprende de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente la

Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Implica el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin discriminación, coacciones o violencia, en esa medida guarda estrecha relación con el derecho a la integridad personal. Supone por una parte el deber del Estado de proteger a los individuos, especialmente a la mujer de presiones de índole familiar, social o cultural que menoscaben su libre determinación en materia sexual o reproductiva, tales como el matrimonio en edad temprana sin el libre y total consentimiento de cada cónyuge o la circuncisión femenina. Igualmente implica la prohibición de prácticas estatales como la esterilización forzada o la violencia y el abuso sexual. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

Se menciona en este aparte la protección por la cual debe velar el Estado y que resalta la Corte dentro del fallo, llama la atención también la explicación y delimitación que se realiza para la comprensión y correspondiente aplicación de un derecho inherente a las mujeres que tienen la decisión de abortar, debiendo el Estado acompañarlas y custodiar su salud con el fin único de defender su vida.

4.4. Derecho a la integridad y dignidad humana.

El derecho a la integridad personal se encuentra estrechamente ligado al derecho a la salud y a la vida por ende existe conexidad entre estos tres. Según los conceptos jurídicos manejados por la Corte Constitucional (2006) “la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico”, lo cual nos acerca a un concepto que ya habíamos tratado dentro de esta investigación y que está relacionado.

Ahora, siendo la dignidad humana un principio y un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, será estudiado desde la perspectiva del aborto y su injerencia en la vida de la madre gestante. Razón por la cual se cita a la Corte Constitucional que es la Corporación que ha regulado, explicado y aplicado este derecho:

La dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal, aun cuando se trate de

proteger bienes jurídicos de relevancia constitucional como la vida. En tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especie humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para procrear. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

Lo anterior, debe estar siempre en concordancia con el respeto al plan de vida de la mujer, donde se deben incluir las decisiones que la madre desee tomar respetando así el derecho a la dignidad humana.

La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes, o infligirle sufrimientos morales deliberados. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

La Corte es clara y específica en su concepto, en el cual centraliza la idea de dignidad humana y lo relaciona con las mujeres que desean abortar, brindando a estas la potestad de elegir y le quita la carga de obligarse actuar en contra de su voluntad.

4.5. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Tratándose del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer gestante en el tema del aborto este se con figuraría en la libre elección que tiene la madre de dar a luz, realizando el análisis a profundidad de las repercusiones que esto traería a su vida actual y su plan de vida, es decir que esta persona sea libre de decidir su destino. De allí que la mujer es autónoma en todas las decisiones que interesen en su vida por lo que puede decir si abortar o tener un hijo en virtud del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 16 señala: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, razón por la cual este derecho se eleva a fundamental y debe ser protegido en todas sus expresiones por Estado colombiano, al respetar la disposición que toma una mujer consciente y al no transgredir derechos de otras personas ni tampoco poner en jaque el orden jurídico, siendo una decisión personal que solo afecta o beneficia a una persona en particular.

Ahora, la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona en el artículo 22 que:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. (ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, art. 22).

Como lo evidencia la norma, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho universal, esto da más peso a la teoría del respeto a la autonomía para la elección de las decisiones para la vida propia de las mujeres gestantes debiendo garantizarse su derecho.

En la reflexión realizada por la Corte en la sentencia C-355 de 2006, habla sobre este derecho, diciendo que para los poderes públicos “está vedada cualquier injerencia en este campo reservado, pues decidir por la persona supone “arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en un medio para los fines que por fuera de ella se eligen”.

Siguiendo la línea que lleva la Corte Constitucional en defensa de este derecho es importante reconocer que en su concepto ajusta claramente la realidad social actual y ejerce la protección efectiva de este derecho. También menciona la predominancia que tiene el individuo frente al Estado, en cuanto a las decisiones que solo le incumben a él.

La Corte también aclara que este es un derecho que “no opera en un ámbito específico, ni ampara una conducta determinada (...) ya que establece una protección genérica, por lo cual se aplica en principio a toda conducta”, razón por la cual no se debería discriminar de acuerdo al argumento, sino que debería tener una aplicación uniforme independientemente del tema a tratar.

5. Sentencia C-355 de 2006

En una larga pero histórica sentencia de los magistrados ponentes Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, dieron pie para que se debatiera fuertemente la total o parcial despenalización del aborto en Colombia.

Los magistrados se encontraron con un problema jurídico complejo el cual consistía en determinar si el nasciturus era garante o no del derecho fundamental a la vida, o si por el contrario prevalecían los derechos fundamentales de la mujer a la dignidad, vida, salud, integridad, libertad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía sexual y reproductiva.

La Corte para dar solución al problema jurídico determinó que:

Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. (Corte Constitucional, 10 mayo de 2006, Sentencia C-355 de 2006).

Esta consideración generó gran polémica, debido a que no se tienen en cuenta los derechos de la madre, pero, contrario sensu, la Corte (2006) resolvió y llegó a la conclusión que “la penalización del aborto en todas circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, esto resulta inconstitucional”. Esta consideración judicial refleja lo que más adelante sería la decisión de la Corte.

En el año 2006 la Corte Constitucional reformó la legislación colombiana en materia de interrupción voluntaria del embarazo estipulando así tres causales legales para acceder a este procedimiento estipulándolo de la siguiente manera:

No se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes tres casos:

1. Salud y vida de la mujer: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un profesional de la medicina;
2. Malformaciones del feto que hacen que sea inviable: Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un profesional de la medicina; y,
3. Acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas: Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006).

La Corte no declaró inexecutable el artículo ya que de hacerlo despenalizaría totalmente el aborto, razón por la cual lo declaró executable condicionado previamente para que siguiera constituyendo un delito, aunque con causales expresas para que exista ausencia de responsabilidad penal cuando el aborto se realice demostrando alguna de las tres causales taxativas.

En este aparte cabe mencionar la reciente demanda instaurada por la abogada Natalia Bernal que cursaba en la Corte Constitucional colombiana la cual buscaba una decisión en cuanto a si era posible retroceder en el reconocimiento de las tres causales de aborto ya establecidas por la Corte Constitucional. A contrario sensu, dentro de este mismo debate el magistrado ponente Alejandro Linares solicitaba la despenalización de este delito en el lapso de las primeras 16 semanas de embarazo, solicitud que sólo fue acogida por tres de los magistrados que debían decidir, en contraposición los demás magistrados de esta Corte argumentaron que el tema ya había sido tratado de fondo en la sentencia C-355 de 2006 y que por lo tanto no cumplía con los requisitos necesario para estudiar nuevamente esta decisión razón por la cual se declararon inhibidos para emitir un pronunciamiento de fondo. EL magistrado Rojas indica que:

Se concluye que la demanda no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que al existir una decisión previa el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad. (Rojas, A. 2020).

Esto quiere decir que por el momento el delito del aborto en Colombia sigue en firme pero se exonera de responsabilidad penal a las mujeres gestantes que acrediten alguna de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo.

6. Derecho Comparado.

En primera medida verificaremos la metodología comparatista que “considera tres niveles de comparación posibles, clasificados así: bajo nivel de abstracción: tratándose del estudio de un solo país, en nivel medio de abstracción: si su estudio involucra varios (< 20) o, alto nivel de abstracción si son muchos (> 50)” (Vivas, 2013). De acuerdo con esto nuestro nivel de abstracción será medio al incluir dentro de la comparación menos de 20 países.

El estudio comparado, como lo menciona la doctora Tania Vivas:

Es incluido como factor relevante para el derecho comparado las soluciones a las violaciones de derechos humanos y a todos los vejámenes que enfrenta la humanidad, independientemente de la cultura, la situación económica o el desarrollo económico; además, se interesa por la respuesta judicial de los tribunales regionales de derechos humanos. La propuesta, entonces, es considerar el derecho comparado como un instrumento viable y enriquecer dentro de la caja de herramientas que puedan utilizar los estudiosos de los derechos humanos. (Vivas, 2014, p. 446).

Importante es el derecho comparado, para dirimir conflictos jurídicos, a nivel social, económico y en general todos los aspectos regulados tomando el ejemplo y la experiencia de aquellos que han sometido a estudio normas que afectan las relaciones humanas directamente.

Comparar instituciones constitucionales como lo enseña Jorge Carpizo significa:

Poner de relieve las aproximaciones y las diferencias que existen entre ellas, tanto en el nivel normativo como en el jurisprudencial y en el de las prácticas, usos y costumbres políticas, con la finalidad primordial de examinar cuáles de ellas pueden auxiliar a fortalecer un sistema constitucional específico, teniendo en cuenta la evolución jurídico-política y la realidad del país.

Dicha comparación se puede realizar entre una, varias o la totalidad de las instituciones constitucionales de un Estado, con aquélla o aquéllas de otro u otros Estados, o por grupos de países, ya sea que guarden o no algunas afinidades entre sí. El método comparativo puede hacer énfasis en los aspectos normativos, en la historia de las instituciones, en su desarrollo, en los resultados obtenidos por esas instituciones al aplicarse en la realidad. Es decir, el método comparativo resulta instrumento de especial utilidad para el perfeccionamiento de las instituciones, para no repetir errores ni caer en falsas ilusiones. (Carpizo, J. 2006, párr. 5, 6).

También, cobra relevancia el hecho de acudir a normas extranjeras con el ánimo de resolver jurídicamente los conflictos entre derechos constitucionales para delimitar el camino a seguir de los jueces en la práctica. Con el ánimo de profundizar aún más sobre este tema, y brindar los argumentos para la despenalización del aborto en Colombia se realiza este paralelo al comparar la normatividad existente en otros países del mundo que ya han aceptado el aborto dentro de su contexto, al igual que los países que rechazan este procedimiento, para que luego de realizado el estudio se puedan aportar a la investigación conclusiones claras y sólidas para la consecución del objetivo del trabajo.

Es necesario realizar el análisis comparado tanto del país frente a países europeos, pero aún más importante es realizarlo con nuestros semejantes vecinos latinoamericanos. Bogdandy menciona que:

Pocas cuestiones sociales son tan delicadas como la cuestión de la igualdad y de la redistribución. Las opiniones al respecto son igualmente dispares. En

este contexto complejo, el concepto de exclusión parece útil. La desigualdad puede ser producto de muchos factores, pero lo cierto es que resulta particularmente profunda, persistente y delicada cuando grupos enteros de personas no están en capacidad de participar en los grandes sistemas sociales, es decir, en los sistemas educativo, sanitario, económico y político, e incluso ni siquiera en el sistema legal. El desafío descrito se capta con el concepto de exclusión. Posibilita una perspectiva comprehensiva de sociedades cuyas capacidades de integración se encuentran en peligro cuando un gran número de personas no son tomadas en cuenta por las instituciones. Es imposible para una sociedad aliviar la desigualdad como déficit sistémico si no logra superar semejante exclusión. (Bogdandy, A.V. 2015, p. 9)

Por estas razones se hace necesario para Colombia tener en cuenta estos aspectos con el ánimo de proteger los derechos de las personas que actualmente no están siendo tomadas en cuenta y en los que la desigualdad, la pobreza y demás problemáticas sociales son invisibilizadas.

Con el fin de abordar esta temática se realizará un recorrido por los países que están a favor del aborto empezando por Norteamérica, luego por Suramérica, Europa y Asia. Posteriormente se tendrán en cuenta países de Centroamérica que rechazan por completo dicho procedimiento, para finalizar aportando conclusiones después de haber realizado el estudio de los argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

6.1. Países que aceptan la legalización del aborto.

6.1.1. Canadá.

En Canadá en 1988, la norma que prohibía el aborto fue declarada inconstitucional y hasta el momento no ha sido reemplazada. Con esto se entiende que el aborto en este país es abiertamente legal. Allí prevaleció siempre su Constitución cuando la Corte Suprema de Justicia canadiense encargada colocó en la balanza los derechos de la mujer y del feto reconociendo su conciencia individual y garantizando el procedimiento en condiciones de seguridad para ésta.

En la sentencia la Corte Suprema de Justicia canadiense estableció:

La sección 251 (del Código Criminal o Criminal Code) claramente interfiere con la integridad física de la mujer. Forzar a una mujer, con la amenaza de una sanción penal, a continuar un embarazo a menos de que cumpla con unos criterios que son ajenos a sus prioridades y aspiraciones, es una profunda interferencia en su cuerpo y una vulneración al derecho a la seguridad personal. (Corte Suprema de Justicia de Canadá, Caso Morgentaler v. The Queen, 1988).

Como lo menciona la anterior cita, es claro para los magistrados canadienses que debe prevalecer la vida y la decisión autónoma que toma una mujer de acuerdo al plan de vida que ella misma haya proyectado ante la coacción de una sanción penal.

El objetivo de los magistrados fue dar la libertad a la mujer de decidir y al mismo tiempo proteger su integridad garantizando el acceso a la salud y por ende protegiendo su vida.

Es comprensible que en un país del primer mundo como lo es Canadá las leyes se ajusten a la realidad social rápidamente. El hecho de que exista una correlación entre esto y el desarrollo normativo dentro del ámbito social y jurídico hace que decisiones como esta tomen relevancia no solo en estos países, sino también a nivel mundial, sirviendo como ejemplo, evidenciando que realmente es posible la despenalización del aborto respetando y protegiendo la vida de la mujer gestante que no desea tener a su hijo.

6.1.2. Estados Unidos.

Ahora, en Estados Unidos la primera decisión que se tomó sobre el tema del aborto fue en el año 1973 y se ha pronunciado en más de 30 oportunidades sobre el tema haciendo aclaraciones, trámites y condiciones a las primeras decisiones que son las bases de la despenalización del aborto en este país. En el caso *Roe v. Wade* la Corte Suprema de Justicia estadounidense expresó que la mujer es libre de tomar la decisión de abortar, en aplicación del derecho a la intimidad, hasta los tres meses de embarazo e incluso después. El objeto de esta decisión fue proteger la salud y la vida de la mujer especificando que el aborto es viable hasta el momento donde el feto se desarrolle a tal punto de ser posible vivir fuera del vientre materno.

Poniendo lupa sobre la sentencia en mención la Corte Suprema de Justicia estadounidense señaló:

El derecho a la intimidad que subyace en el concepto de libertad y en las restricciones a las acciones del Estado, establecido en la catorceava enmienda de la Constitución, es lo suficientemente amplio para cobijar la decisión de una mujer de terminar su embarazo. (Corte Suprema de Justicia estadounidense, *Rode v. Wade*, 1973).

Esta Corte reconoce y protege el derecho constitucional de la mujer en estado de gestación basando su argumentación en la catorceava enmienda de la Carta Magna de ese país, aclarando así toda duda respecto al tema y dejando claras las pautas respecto de la despenalización.

Dentro de este mismo fallo los magistrados de la Corte en mención realizaron el estudio de las repercusiones físicas, mentales, psicológicas y en general de salud, pero también analizaron el ámbito socioeconómico protegiendo así la vida de la mujer que está en desventaja frente a otras madres y analizando las repercusiones sociales que esto conllevaría.

Dentro de los argumentos más importantes dados por la Corte estadounidense se encuentra que la concepción particular de la vida no podía anular el derecho a la intimidad de la mujer:

(...) el Estado tiene un interés importante y legítimo en preservar y proteger la salud de la mujer embarazada que busca la atención y tratamiento médico, sea o no residente del estado federado, y que además tiene otro interés legítimo e importante en proteger la vida potencial. Estos intereses son diferentes. Cada uno crece sustancialmente en la medida en que la mujer se acerca al término del desarrollo del embarazo, y, en un momento durante éste cada uno se convierte en imperioso. . (Corte Suprema de Justicia estadounidense, *Rode v. Wade*, 1973).

En resumidas cuentas, la Corte estadounidense protege el derecho a la intimidad en contra de la acción estatal, donde incluye el derecho a abortar por medio de la enmienda catorce de su Constitución, además de no aceptar las razones jurídicas que motivaban la protección de la vida desde el momento de la concepción pues no existía ninguna disposición que estableciera que el embrión y luego el feto, era persona.

Es necesario mencionar en este caso que “Norma McCorvey la mujer cuyo caso legalizó el aborto en Estados Unidos” (BBC News, 2017) se arrepintió de la decisión de abortar “después de

haberse volcado a la religión, (...) McCorvey dijo que haber sido parte de la decisión de legalizar el aborto fue el mayor error de su vida”.

6.1.3. Uruguay.

En Uruguay el aborto se reglamentó y despenalizó en el año 2012 por medio de la Ley No. 18987 del 22 de octubre de 2012 la cual señalaba lo siguiente:

Artículo 2. Despenalización. La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gestación. (Ley 18978 del 2012, art. 2).

Siendo este el primer país latinoamericano que relacionamos, podemos decir que se ha venido dando un proceso de cambio que está influyendo en el continente, primero tenemos la despenalización del aborto, con una reglamentación clara y específica, y luego, hasta hace muy poco tiempo legalizó el consumo de marihuana con fines terapéuticos y recreativos. Desde la perspectiva local, debemos ver y analizar prudentemente lo que suceda en este país, donde la cultura no es igual a la colombiana, pero si muy similar para tal vez en el futuro avanzar en lo respecta a estos aspectos.

Ahondando en el tema que nos concierne, cabe resaltar que la despenalización del aborto en este país no fue vía jurisprudencial sino vía legislativa, donde el Congreso expidió una ley de la república. A continuación, se refieren los requisitos específicos que menciona la normatividad uruguaya, mencionando condiciones tales como el plazo y las especificaciones médicas generales con el fin de respetar el derecho de decisión que tiene la mujer en estado de gestación y los demás derechos que le corresponden.

Artículo 3°. Requisitos. Dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica,

sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. (Ley 18978 del 2012, art. 3).

En este primer inciso del artículo en estudio se evidencia que el legislador tiene en cuenta los aspectos tales como las condiciones sociales, económicas y familiares tal como sucede en Italia, entiendo que la mujer es libre de tomar las decisiones que considere pertinentes para su vida actual y para su plan de vida, sin que el Estado deba entrar a entorpecer dicha decisión.

El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario, el que a éstos efectos estará integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social.

El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. (Ley 18978 del 2012, art. 3)

Si se realiza un análisis a conciencia de esta norma notamos que el legislador fue demasiado cuidadoso al imponer la condición de tener un equipo interdisciplinario con el fin de garantizar a la mujer la libre decisión de abortar, y además de esto y no menos importante proteger su salud desde un punto de vista integral.

La reflexión en este punto deber ser la forma en la que Uruguay encontró la solución más efectiva para resolver un problema que afecta a las mujeres en su territorio y a la misma vez la

manera en la que dispuso toda una ayuda complementaria para estas mujeres al ordenar el apoyo y seguimiento de un equipo médico y social.

Se puede decir entonces, dentro de la investigación, que esta ley es robusta y completa, al garantizar los derechos de la mujer gestante y garantizando un proceso con todo el profesionalismo del caso, con el cuidado y las condiciones de higiene con las que cualquier mujer debería ser intervenida en Uruguay, Colombia y en cualquier parte del mundo.

6.1.4. España.

En España se despenalizó el aborto en el año 1985 por vía jurisprudencial, pero se reglamentó hasta el año 2010 con la Ley Orgánica 2 de 2010 de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En ese año se modificó el artículo 417 del Código Penal español, despenalizando este procedimiento en las mismas tres causales que actualmente se manejan en Colombia.

La normatividad española indica:

Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo:

Artículo 12. Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.” (Ley Orgánica 2 de 2010, art. 12).

Ahora, en España, se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a diferencia de Colombia que tiene causales específicas para no ser tipificado como delito, este contraste radica en la enorme brecha cultural y económica que diferencia a Europa de Latinoamérica.

En este caso el procedimiento, como en la mayoría de los países tiene ciertos requisitos que deben cumplirse para lograr el objetivo de la madre gestante que voluntariamente desea interrumpir su embarazo:

Artículo 13. Requisitos comunes. Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección.
2. Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado.
3. Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal. (Ley Orgánica 2 de 2010, art. 13).

En este artículo se evidencia claramente cómo debería ser el procedimiento adecuado para la interrupción del embarazo en condiciones dignas, de igualdad y de salubridad que garantice la protección de la vida de la mujer en embarazo, allí es donde el Estado ejerce realmente un control o regulación sobre el aborto al avalar los derechos a esta población.

En la normatividad de España emerge la interrupción del embarazo a petición de la mujer como una nueva forma de proteger sus derechos, pero no sin antes verificar de acuerdo con un procedimiento que la mujer está segura de la decisión que va a tomar y que no sufre presión externa de ningún tipo, ofreciéndole alternativas y ayudas estatales a modo de información para la toma de su decisión.

Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurren los requisitos siguientes:

- a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad,
- b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. (Ley Orgánica 2, 2010, art. 14).

Como complemento de las decisiones jurisprudenciales nace la norma vía legislativa la cual acepta el aborto, no sin antes imponer algunos requisitos para que la mujer tenga en sus manos todas las herramientas y pueda hacer el estudio de todas posibilidades que tiene y que le ofrecen con el fin de tomar la decisión más adecuada para su plan de vida.

En cuanto a la interrupción por causas médicas la Ley 2 de 2010 señala que:

Artículo 15. Interrupción por causas médicas. Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada
- b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto
- c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida (Ley Orgánica 2, 2010, art 15).

Así como lo menciona el aparte citado, las causas de interrupción del embarazo por causas médicas en España son las mismas causales que están vigentes en Colombia, la diferencia es que el gobierno español impone un límite temporal de máximo 22 semanas de gestación para la realización del procedimiento, todo esto bajo la supervisión profesional de un médico que es quien da el aval para realizar dicho procedimiento dentro de los mejores parámetros de seguridad y salubridad.

Al estudiar y asimilar la situación legal en España se puede reflexionar y comparar con la realidad que viven miles de mujeres colombianas que interrumpen su embarazo en las condiciones más precarias e inseguras siendo así un riesgo para sus vidas, derecho que tiene que prevalecer en estos casos.

6.1.5. Italia.

En Italia se despenalizó el aborto en el año 1975 y posteriormente en el año 1978 se reglamentó por medio de la Ley 194 de 1978 la cual proporciona las condiciones para la realización del procedimiento. Dentro de la mencionada ley se encuentra:

Artículo 5. Además de garantizar las pruebas médicas que sean necesarias, el consultorio y la estructura socio-sanitaria tienen el deber en todo caso, y especialmente cuando la solicitud de interrupción de embarazo sea motivada por condiciones económicas, sociales o familiares de la gestante, de estudiar junto con la mujer y el padre del concebido - en los casos en que aquella lo consienta - el modo de resolver los problemas presentados, de ayudarla a superar las causas que la puedan inducir a interrumpir el embarazo, de apoyarla para que pueda hacer valer sus derechos de trabajadora y madre, de promover todo tipo de actuación para sostener a la mujer, ofreciéndole todas las ayudas que sean necesarias durante el embarazo y después del parto. (Ley 194 de 1978, art. 5).

En la legislación italiana se evidencia que se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de la mujer en estado de embarazo, a diferencia de Colombia donde estos aspectos son mínimamente valorados.

Artículo 6. La interrupción voluntaria del embarazo, pasados los primeros noventa días, puede ser practicada: a) cuando el embarazo o el parto comporten grave peligro para la vida de la mujer; b) cuando se constate la existencia de procesos patológicos, entre ellos los relativos a relevantes anomalías o malformaciones del nasciturus, que pongan en grave peligro la salud física o psíquica de la mujer”. (Ley 194, 1978, art. 6)

Solamente en estos casos se puede interrumpir el embarazo después del plazo de noventa días. Cuando el embarazo es en menores de dieciocho años se necesita el consentimiento de quien ejerce la potestad o la tutela.

Los costos de los procedimientos de este tipo y los que además se deriven de éste son costeados por el seguro social, es decir por el Estado italiano.

6.1.6. India.

En la República de India a diferencia de nuestro país, está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas y en ciertos casos incluso hasta las 20, esto en concordancia con la Ley de terminación del embarazo de 1971, Acto No. 34 de 1971, reformado por la Ley 64 de 2002.

En este país opera un sistema de libertad desde la concepción donde en las primeras 12 y hasta 20 semanas de gestación la madre es libre de decidir lo que desea para su vida, es decir el aborto está totalmente despenalizado durante el periodo mencionado. Pasadas la doce o veinte semanas dependiendo el caso, se comienzan a aplicar los requisitos o causales que se manejan en nuestro país.

Cuando pueden ser terminados los embarazos por médicos registrados.

(2) Sujeto a la disposición de la subsección (4), un embarazo puede ser interrumpido por un médico registrado,-

(a) cuando el embarazo no exceda las doce semanas, o

(b) cuando el embarazo exceda las doce semanas pero no sobrepase las veinte semanas si no menos de dos médicos registrados son de la opinión de buena fe que

i) la continuación del embarazo podría involucrar un riesgo a la vida de la mujer o cause un grave daño en la salud física o mental de la mujer; o

ii) existe un riesgo sustancial que el niño que nazca podría sufrir de una anomalía física o mental que devenga en una discapacidad grave. (Acto No. 34 de 1971, reformado por la Ley 64 de 2002).

Un beneficio que maneja la normatividad de India es que, en caso de falla del método anticonceptivo, se podría realizar el aborto en razón a la angustia causada por un embarazo no deseado siendo este un daño severo a la salud mental de la mujer gestante.

En el caso del aborto en India, evidenciamos claramente que su normatividad es más laxa y por lo tanto más beneficiosa para las mujeres que desean interrumpir su embarazo, respetando su libertad de decisión, protegiendo su salud y vida.

6.2. Países que rechazan la legalización del aborto.

6.2.1. Nicaragua.

En Nicaragua está penalizado totalmente el aborto, norma que esta expresa en la Ley 641 de 2006 que corresponde al Código Penal:

Artículo 143: Aborto. Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario. A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de uno a dos años de prisión. (Código Penal Nicaragüense, 2017).

Como se evidencia en la normatividad nicaragüense, no existe ninguna excepción al aborto, es decir funciona como hasta el año 2006 en Colombia. Según Human Rights Watch (2017) “la prohibición total del aborto en este país está poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres y niñas” empeorando la situación al no reconocer un eximente de responsabilidad “aún, cuando los embarazos constituyan un riesgo para la vida o sean el resultado de una violación” que son las causales básicas para que no se presente el delito de aborto.

Las mujeres y niñas con embarazos en situación de crisis llevan a cabo abortos clandestinos inseguros. A menudo, están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de esos abortos, y algunas mujeres y niñas postergan la decisión de pedir asistencia y no revelan a los médicos la causa de las complicaciones. Algunos proveedores médicos, presionados por el conflicto entre la ley y la ética médica, han denunciado a mujeres y niñas a la policía por presuntos abortos. Conforme al código penal de Nicaragua, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se exponen ser penadas con hasta dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican pueden recibir penas de hasta seis años. (Human Rights Watch, 2017).

Esto que específicamente reporta Human Rights Watch es el más claro ejemplo de lo que se vive no solo en Nicaragua sino en los demás países con prohibición total del aborto, e incluso en los países donde está parcialmente penalizado dada la preocupación que sufren estas mujeres al no garantizarse sus derechos constitucionales.

Ahora, en cuanto al análisis Constitucional en contra del aborto en este país se cita el artículo 23 de su Constitución Política que dice que “el derecho a la vida es inviolable, inherente

a la persona humana”, es decir, así como en nuestro país, es un derecho fundamental, aunque tampoco existen referencias específicas en cuanto al nasciturus como titular de derechos o velando por su protección. Nicaragua tiene un apartado constitucional especial que hace alusión a la protección del proceso de reproducción humana en su artículo 79 y también reconocen el derecho a la salud en el artículo 59 pero esto en contra del aborto y a favor de la vida tanto del que está por nacer como de la madre desde el punto de vista constitucional.

En el año 2007 fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad (equivalente a la Acción Publica de Inconstitucionalidad en Colombia), en el cual demandan personas individualmente y organizaciones nacionales a favor de la despenalización del aborto. Esta demanda iba dirigida contra el artículo 165 de la Ley 603 el cual tipificaba como un delito el aborto ya que según los demandantes esta ley constituía una transgresión a los derechos humanos de las mujeres que están reconocidos en la Constitución Nicaragüense y respaldada por el Bloque de Constitucionalidad integrado por los tratados internacionales de los que este país hace parte.

6.2.2. República Dominicana.

En República Dominicana el delito de aborto, al igual que en Nicaragua, está completamente penalizado, es decir, que en este caso tampoco aplican excepciones al aborto en ningún caso. Se dispone en el Código Penal Dominicano:

Artículo 107: Aborto. Salvo lo previsto en el artículo 110, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos, o por cualquier medio, cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando esta lo consienta, será sancionado con dos a tres años de prisión menor.

Párrafo I. La misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto haya sido efectuado.

Párrafo II. Si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine

en él una severa tara física o psíquica, el autor será sancionado con uno o dos años de prisión menor. (Código Penal Dominicano, 2014).

Así como lo hizo con Nicaragua, Human Rights Watch envió un informe a República Dominicana donde dejaba en evidencia las razones por las cuales deberían flexibilizar el delito del aborto en este país.

El informe “Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana”, documenta evidencias de que mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados se someten a abortos clandestinos, a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y su vida. Muchas experimentan complicaciones de salud a raíz de abortos practicados en condiciones inseguras, y algunas incluso mueren. Algunas mujeres y niñas sufren abusos, desatención o maltrato por parte de proveedores de la salud. La prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros. Como punto de partida para cumplir las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos, el Congreso debería despenalizar el aborto en tres circunstancias. (Human Rights Watch, 2018).

Esto vincula a esta nación al deber de cumplimiento de los Derechos Humanos y velando por el bienestar de las mujeres con el deseo de interrumpir su embarazo. Además, hace un análisis de los riesgos a los que se enfrenta esta población, que son comunes en los países con este tipo de restricciones.

Realizando el análisis constitucional correspondiente, en este país en el año 2014 en cabeza de su presidente fue promulgada una reforma al Código Penal donde despenalizaba el aborto en las mismas tres circunstancias que en Colombia, pero con posterioridad en el año 2015, el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia TC/0599/15 restringió el acceso al aborto seguro, declarando inconstitucional la reforma. Se consideró que esta decisión era contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, continuando con la violación de derechos a las mujeres que tiene el deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo demostrando así la radical protección de la vida tanto de la mujer como del nasciturus desde una posición conservadora.

6.2.3. Honduras.

En este país centroamericano el delito de aborto está tipificado en el Código Penal sin ningún tipo de excepción.

Artículo 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado:

1. Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido;
2. Con seis (6) a ocho (8) años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación;
3. Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. (Código Penal Hondureño, 1983).

Un impactante informe elaborado por HRW tiene como título “Las mujeres afectadas por la prohibición del aborto en Honduras se ven obligadas a decidir entre la vida y la muerte”. El siguiente subtítulo hace la siguiente referencia:

Las llamadas a La Línea casi siempre eran de mujeres en estado de pánico, a menudo llorando. “¡Por favor, respóndanme!”, suplicaban. “¡No me tengan esperando!”. Muchas decían que llamaban por una “amiga”. Todas tenían una necesidad acuciante de saber lo mismo, algo que la ley hondureña prohíbe: cómo interrumpir un embarazo no deseado en forma segura. (Human Rights Watch, 2019).

En el caso de este país, es donde más fuerte son las penas, no solo las penales sancionatorias sino además las morales que impone la sociedad. Es donde debido a esto las mujeres con deseo de interrumpir su embarazo sienten demasiado miedo al practicarse clandestinamente estos procedimientos, no sólo porque corre riesgo su salud y vida, sino también por las penas aplicables.

Según Human Rights Watch (2019), el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, sin importar si la mujer fue víctima de violación o incesto, tampoco importa si está en peligro la vida de la mujer gestante ni si se presentan malformaciones que hagan inviable la vida del feto. Aunado

a esto, el gobierno de Honduras también prohíbe la anticoncepción de emergencia, conocida como “pastilla del día después”.

Es preciso considerar que:

Investigaciones realizadas en todo el mundo han demostrado que cuando se prohíbe el aborto, las mujeres no tienen menos abortos, sino que tienen abortos más riesgosos. Esto pone en peligro su salud e incluso sus vidas, si los métodos son inseguros o si las complicaciones no se tratan de inmediato. Las mujeres en Honduras interrumpen embarazos “con mucho temor, con mucha desinformación”, nos comentó un defensor. (Human Rights Watch, 2019).

Sumado a esto, la Human Rights Watch (2019) menciona que no existe una estadística clara de los abortos clandestinos a los que se someten mujeres y niñas, pero, pero según estimaciones de una organización no gubernamental (ONG) hondureña, cada año se realizan alrededor de entre 50.000 y 80.000 abortos, cifra que sorprende y que invita a la reflexión de la situación que se presenta en Honduras y en los países que no flexibilizan el delito de aborto.

Profundizando en el análisis constitucional, tanto desde el poder legislativo como también desde el judicial en Honduras se protege a cabalidad el derecho constitucional a la vida consagrado en el artículo 65 “el derecho a la vida en inviolable”, como complemento y totalmente en contra del aborto en su Constitución Política en el artículo 67 menciona “Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”. Dentro de la reflexión por la completa prohibición del aborto encontramos que Honduras al prohibir esta conducta, está incumpliendo los tratados internacionales de los que hace parte, al no velar efectivamente por la protección de los derechos de las mujeres.

Conclusiones

Finalmente, es evidente que las condiciones actuales para la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia no son las apropiadas, ni siquiera bajo las tres causales que señaló la Corte Constitucional, los derechos fundamentales de las mujeres que desean abortar deberían cumplirse

a cabalidad y ejercitarse en su totalidad, ya que derechos tales como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía sexual y reproductiva, a la integridad, dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad se ven vulnerados en las mujeres que desean realizar este procedimiento, omitiendo el Estado, ejercer la protección efectiva de los mismos. Tal es la situación que incluso la Human Rights Watch (2019) menciona que expertos de la ONU concuerdan en que denegar el acceso al aborto a mujeres y niñas atenta contra sus derechos humanos e incluso, puede constituir tortura, en los casos de violación, cuando las mujeres son obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado.

En consecuencia, al hacer una interpretación e interiorización profunda de las diferentes normatividades a nivel mundial se observa que cuando es notorio el desarrollo legal y jurisprudencial de acuerdo con el avance social y al contexto actual es posible regular un tema tan complicado como lo es el aborto. También es relevante aclarar que en el estudio de derecho comparado presentado en este artículo, lo que realmente tiene un trasfondo importante es la protección todos los derechos de la mujer que toma la decisión de abortar y que aquello que no está acorde con la problemática es que el Estado imponga forzosamente una carga a la mujer que no está en la capacidad o que no simplemente no desea seguir adelante con su embarazo.

Es destacable que en la mayoría de las normatividades de los países estudiados que están a favor, se tenga en cuenta en el examen de la decisión, el contexto actual tanto económico, social, cultural y de salud en todos sus aspectos donde es visible la protección de los derechos de las mujeres gestantes. Cabe aclarar que las diferencias entre Colombia y países europeos como los mencionados en este artículo son comprensibles debido a su desarrollo, pero esto no quiere decir que en Colombia no se pueda alcanzar una protección similar haciendo uso correcto de los medios que se tienen al alcance, así como lo han hecho países similares al nuestro.

Al finalizar esta investigación se puede concluir diciendo que el aborto en Colombia se puede despenalizar completamente si se realiza un examen a conciencia de nuestras realidades actuales, practicando el mismo ejercicio que realizaron los países en este artículo estudiados, teniendo en cuenta que estos velan primordialmente por el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en su Carta Política haciendo una correcta interpretación de éstos.

Como última reflexión, es claro que en Colombia y en el mundo, el problema radica en que “se enfrenta el valor de dos vidas: La autónoma, del derecho fundamental cierto de la persona mujer, a la no autónoma de quien no ha nacido ni es persona”. (Corte Constitucional, 10 mayo de 2006, Sentencia C-355 de 2006). En países suramericanos, en Europa y Asia, que están a favor del aborto, no cabe duda de que prevalecen los derechos fundamentales ciertos, los derechos existentes.

Referencias Bibliográficas

- BBC News (2017). Los 5 países en los que el aborto está completamente prohibido. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40677494>
- BBC News (2017). Roe vs. Wade: muere Norma McCorvey, la mujer cuyo caso legalizó el aborto en Estados Unidos (y luego se arrepintió). Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-39017963>
- Bogdandy, A.V. (2015). Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador. *Revista Derecho Del Estado*, (34), 3. Recuperado de: <https://doi.org/10.18601/01229893.n34.01>
- Carpizo Mac Gregor, J. (2006). Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado. *Anuario de Derechos Humanos*, 7(7), 265. Recuperado de: https://doi.org/10.5209/rev_ANDH.2006.v7.21749
- Center for Reproductive Rights (2015). Tribunal Constitucional de República Dominicana emite decisión regresiva en relación a la despenalización del aborto. Recuperado de: <https://reproductiverights.org/centro-de-prensa/tribunal-constitucional-de-rep%C3%ABlica-dominicana-emite-decisi%C3%B3n-regresiva-en-relaci%C3%B3n-a-la-despenalizacion-del-aborto>
- Dalton, M. (2006) Aborto: fenómeno sin nomenclatura, Red Desacatos. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucatolicasp/detail.action?docID=3167868>.
- Faundes, A & Barzelatto, J. (2006). El drama del aborto en busca de un consenso. Tercer Mundo Editores.
- Flasco Chile (2011). Aspectos Centrales de la Regulación Jurídica y Normativa del Aborto. Recuperado de: <http://www.flacsochile.org/wp-content/uploads/2015/04/Nicaragua-Aspectos-Centrales-de-la-Regulaci%C3%B3n-Jur%C3%ADdica-y-Normativa-del-Aborto.pdf>
- Garrido, E. (2012). Aborto un problema de salud. El Cid Editor.

- Hincapié, D & Quintana, O. (2015) Justicia y Objeción de Conciencia. Revista Novus Jus (Vol. 9 No. 2). Págs. 11-48.
- Hoyos, I. (2006). La Corte Constitucional: entre la ley de gradualidad y la gradualidad de la ley. *Dikaion*, vol. (15), págs. 53-70.
- Human Rights Watch (2017). Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida>
- Human Rights Watch, Es tu decisión, es tu vida. La criminalización total del aborto en la Republica Dominicana. (2018).
- Human Rights Watch (2019). Las mujeres afectadas por la prohibición del aborto en Honduras se ven obligadas a decidir entre la vida y la muerte. Recuperado de: <https://www.hrw.org/es/news/2019/06/06/las-mujeres-afectadas-por-la-prohibicion-del-aborto-en-honduras-se-ven-obligadas>
- Iustitia Sacerdos (2016). El aborto en Italia. Recuperado de <http://www.iustitiae.tomas-moro.org/derecho-a-la-vida/articulos-derecho-a-la-vida/elabortoenitalia> . Consultado el 05/11/19
- Johnson, N., López, G. A., & Sapriza, G. (2011). (des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos: abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja.
- Lamus, F. & Rocha, S. (2009) Salud pública y aborto. Universidad de La Sabana.
- Machado, C. (2010). La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como causa de ausencia de responsabilidad penal. *Derecho Penal y Criminología*. (Vol. 31), págs. 81-101.
- Meneses, J. (2016). Tensión entre el aborto y objeción de conciencia. Universidad Católica de Colombia
- Navas H, A. (2011). La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 19 semanas de gestación. Universidad Católica de Colombia. Trabajo de Investigación.
- Navas, A. (2014). El aborto a debate. Ed. EUNSA.

- Pichler, S. (2012). Beneficios médicos y sociales desde la legalización del aborto en Estados Unidos. Planned Parenthood Federation of America Inc.
- Pulido-Ortiz, F. (2014). Análisis de la interpretación y construcción del derecho a la vida en la jurisprudencia constitucional colombiana. *Díkaion*, (Vol. 23), 277-298.
- Quinche, M. (2018). Derecho Constitucional Colombiano. Temis.
- Sandoval, O & Sanín, R. (2005). Justicia Constitucional. El rol de la Corte Constitucional en el Estado Contemporáneo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana - Legis Editores.
- Torres, E. (2019). El aborto y sus procedimientos clandestinos. *Jurídicamente*, (Vol. 6), 35-40.
- Vivas-Barrera, T.G. (2014). Un ejercicio de derecho comparado en materia de Derechos Humanos. UNILBIRE Cali. Revista Entramado 2014, Vol. 10, N. 1 enero - junio 2014. p. 176 -189.
- Vivas-Barrera, T. G. (2012). El amparo mexicano y la Acción de Tutela colombiana. Un ejercicio de derecho constitucional comparado en Latinoamérica. En: Pensamiento Jurídico *ISSN*: 0122-1108. Ed. Unibiblos Universidad Nacional De Colombia, 2012. Vol. 33 p. 13 - 66.
- Vivas-Barrera, T.G. (2014). Comparar: un método de análisis jurídico. Capítulo 12. pp. 429-450. En Constitucionalismo Científico II “Entre el Estado y el Mercado”. Ed. Temis. Universidad Nacional UNIJUS. Bogotá.
- Younes, D. (2018). Corte Constitucional Índice Temático y Cronológico Sentencia y Tutelas 2018 (16ª ed.). Ed. Legis.

Jurisprudencia Nacional

Corte Constitucional, 10 mayo de 2006, Sentencia C-355 de 2006, MP Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas.

Jurisprudencia Internacional

Corte Suprema de Justicia de Canadá, Caso Morgentaler v. The Queen, 1988.

Corte Suprema de Justicia estadounidense, Rode v. Wade, 1973.

Tribunal Constitucional de República Dominicana, Sentencia TC/0599/2015.

Normatividad Nacional

Mario Arboleda Vallejo. (2013). Código Penal Comentado. Ed. Leyer.

Normatividad Internacional

Cortes Generales, Rey Juan Carlos I, Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, Ley Orgánica 2 de 2010.

Corte Suprema de Justicia Italiana, Normas sobre la tutela social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo. Ley 194 de 1978.

Parlamento de India, Ley de terminación del embarazo de 1971, Acto No. 34 de 1971, reformado por la Ley 64 de 2002.

Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, Interrupción Voluntaria del Embarazo Normas. Ley No. 18978 de 2012.

Organización de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.